



*Al servicio de la Justicia y de la Paz Social*

JOSE GILDARDO RAMIREZ GIRALDO  
Magistrado

*Referencia:* Ejecutivo  
*Demandante:* BANCOLOMBIA S.A.  
*Demandado:* DIANA MARÍA HINCAPIÉ CADAVID Y/O  
*Decisión:* Cumple fallo de tutela (Revoca auto)  
*Radicado:* 05001 31 03 011 2014 00036 01  
*Auto Nro.:* 003

**DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN**  
**TRIBUNAL SUPERIOR**  
**SALA UNITARIA DE DECISIÓN**

Medellín, veintiuno de marzo de dos mil veintitrés

Dando cumplimiento a la sentencia de tutela STC2400-2023 proferida por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia del 15 de marzo de 2023, procede esta Sala a resolver nuevamente el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte demandada, contra la providencia del 4 de febrero de 2020, por el JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE ENVIGADO, mediante la cual se NO SE DECRETÓ LA TERMINACIÓN DEL PROCESO POR DESISTIMIENTO TÁCITO.

**ANTECEDENTES**

En el proceso de la referencia, mediante auto del 27 de octubre de 2014 se libró mandamiento de pago dentro la demanda ejecutiva promovida por BANCOLOMBIA S.A. contra los señores DIANA MARIA HINCAPIÉ CADAVID y FERNANDO LONDOÑO NARANJO, dictándose sentencia el 2 de octubre de 2015. Posteriormente los demandados solicitaron en escrito del 3 de febrero de 2020 se decretara el desistimiento tácito conforme al artículo 317 del C. General del P., solicitud que fue negada por el Juzgado de conocimiento en proveído del 4 de febrero de 2020 (Fls. 150). Frente a esta decisión se interpuso el recurso de reposición y el subsidio el de apelación, negándose el horizontal y concediendo la alzada.

Como fundamento de su disenso, los demandados sostuvieron que el sistema escritural ya es obsoleto en el sistema actual; en tanto que se implementó el sistema oral el cual propende por la agilidad y efectividad del proceso jurisdiccional, razón por la cual el Código General del Proceso conduce a que la sentencia o auto que ordene seguir adelante con la ejecución se dicte dentro de un término prudencial y que la ejecución de dicha decisión no quede por más de dos años, en perjuicio de los intereses del demandado, especialmente cuando existen medidas cautelares vigentes sobre inmuebles de su propiedad. Por lo anterior solicitó se revoque la decisión indicada.

La parte demandante, dentro del término del traslado no se pronunció. Siendo la oportunidad para resolver a ello se procede previas las siguientes,

### **CONSIDERACIONES**

Sabido es que, el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos en la ley sustancial y en tal virtud los procesos se constituyen en la herramienta que permite mediante una serie concatenada de actos, materializar con tal fin el derecho al acceso a la administración de justicia y a una pronta y cumplida justicia.

En razón de lo anterior el legislador ha dotado a los jueces de una serie de herramientas que impidan la parálisis o dilación injustificadas de los procesos.

Es así como en aplicación de lo anterior, el legislador previo la figura del desistimiento tácito como forma de terminación anormal del proceso, actualmente se encuentra regulada a partir de lo normado en el artículo 317 del Código General del Proceso, el cual dispone:

*"ARTÍCULO 317. DESISTIMIENTO TÁCITO. El desistimiento tácito se aplicará en los siguientes eventos:*

**1. Cuando para continuar el trámite de la demanda, del llamamiento en garantía, de un incidente o de cualquiera otra actuación**

**promovida a instancia de parte, se requiera el cumplimiento de una carga procesal o de un acto de la parte que haya formulado aquella o promovido estos, el juez le ordenará cumplirlo dentro de los treinta (30) días siguientes mediante providencia que se notificará por estado.**

Vencido dicho término sin que quien haya promovido el trámite respectivo cumpla la carga o realice el acto de parte ordenado, el juez tendrá por desistida tácitamente la respectiva actuación y así lo declarará en providencia en la que además impondrá condena en costas.

El juez no podrá ordenar el requerimiento previsto en este numeral, para que la parte demandante inicie las diligencias de notificación del auto admisorio de la demanda o del mandamiento de pago, cuando estén pendientes actuaciones encaminadas a consumir las medidas cautelares previas.

2. Cuando un proceso o actuación de cualquier naturaleza, en cualquiera de sus etapas, permanezca inactivo en la secretaría del despacho, porque no se solicita o realiza ninguna actuación durante el plazo de un (1) año en primera o única instancia, contados desde el día siguiente a la última notificación o desde la última diligencia o actuación, a petición de parte o de oficio, se decretará la terminación por desistimiento tácito sin necesidad de requerimiento previo. En este evento no habrá condena en costas o perjuicios a cargo de las partes.

El desistimiento tácito se regirá por las siguientes reglas:

a) Para el cómputo de los plazos previstos en este artículo no se contará el tiempo que el proceso hubiese estado suspendido por acuerdo de las partes;

b) **Si el proceso cuenta con sentencia ejecutoriada a favor del demandante o auto que ordena seguir adelante la ejecución, el plazo previsto en este numeral será de dos (2) años;**

c) **Cualquier actuación, de oficio o a petición de parte, de cualquier naturaleza, interrumpirá los términos previstos en este artículo;**

d) Decretado el desistimiento tácito quedará terminado el proceso o la actuación correspondiente y se ordenará el levantamiento de las medidas cautelares practicadas;

e) La providencia que decrete el desistimiento tácito se notificará por estado y será susceptible del recurso de apelación en el efecto suspensivo. La providencia que lo niegue será apelable en el efecto devolutivo;

(...)."

De la normatividad transcrita, se desprenden la existencia de dos supuestos que habilitan la terminación anormal del proceso sin importar el estado en que se encuentre; interesándonos el segundo de ellos que alude a la existencia de una parálisis del proceso por dos años, luego de

dictada la sentencia, considerándose como una sanción impuesta por la inactividad del demandante.

De todo lo cual queda claro que el numeral 2º del citado artículo 317 revela cuatro cosas, que antes eran imprecisas: (i) que la figura opera tanto en los procesos de conocimiento, en general, como en los ejecutivos, esto es, en asuntos de cualquier naturaleza; (ii) que tiene aplicación háyase o no dictado sentencia, y en el caso de los ejecutivos la orden de seguir adelante la ejecución, ya mediante sentencia, ora con auto, por cuanto puede imponerse en cualquier estado del proceso; (iii) que si el asunto se halla en esta fase, es decir, después de la sentencia o de la orden de continuar la ejecución, se requiere el paso del tiempo por dos años, contados desde el 1º de octubre de 2012, que fue cuando el artículo 317 entró en vigencia; y (iv) que para evitar esta consecuencia procesal, cualquier actuación que se propicie o se realice, de oficio o a petición de parte, de cualquier naturaleza, impide que se cumpla ese término.

La traducción de lo anterior es que ya está definido que se desiste tácitamente de cualquier proceso (de conocimiento o ejecutivo), en cualquiera de sus etapas (antes o después de sentencia o su equivalente en los ejecutivos) y que la parte demandante tiene expedito el camino, por uno o por los dos años de que habla el literal b), y de manera permanente, porque la norma no limita las ocasiones en que pueda intervenir, para evitar que se configure el desistimiento tácito, para lo cual bastará que se realice cualquier actuación, sin importar su naturaleza.

Al respecto, en la sentencia STC 11191 de 9 de diciembre de 2020, para unificar las reglas jurisprudenciales de interpretación de la referida norma, sobre los procesos ejecutivos, la Sala señaló:

"(...) Dado que el desistimiento tácito consagrado en el artículo 317 del Código General del Proceso, busca solucionar la parálisis de los procesos para el adecuado funcionamiento de la administración de justicia, la «actuación» que conforme al literal c) de dicho precepto «interrumpe» los términos para [que] se «decrete su terminación anticipada», es aquella que lo conduzca a «definir la controversia» o a poner en marcha los «procedimientos» necesarios para la satisfacción de las prerrogativas que a través de ella se pretenden hacer valer". "En suma, la «actuación» debe ser apta y apropiada y para «impulsar el proceso» hacia su finalidad, por lo que, «[s]imples solicitudes de copias o sin propósitos serios de solución de la controversia, derechos de petición intrascendentes o inanes frente al petitum o causa petendi» carecen de esos efectos, ya que, en principio, no lo «ponen en marcha» (STC4021-2020, reiterada en STC9945-2020)".

"Ahora, lo anterior se predica respecto de los dos numerales de la norma comentada, ya que además que allí se afirma que el «literal c» aplica para ambos, mediante los dos se efectivizan los principios de eficacia, celeridad, eficiencia, lealtad procesal y seguridad jurídica. No obstante, dado que prevén hipótesis diferentes, es necesario distinguir en cada caso cuál es la «actuación eficaz para interrumpir los plazos de desistimiento".

"Como en el numeral 1º lo que evita la «parálisis del proceso» es que «la parte cumpla con la carga» para la cual fue requerido, solo «interrumpirá» el término aquel acto que sea «idóneo y apropiado» para satisfacer lo pedido. De modo que si el juez conmina al demandante para que integre el contradictorio en el término de treinta (30) días, solo la «actuación» que cumpla ese cometido podrá afectar el cómputo del término".

"En el supuesto de que el expediente «permanezca inactivo en la secretaría del despacho, porque no se solicita o realiza ninguna actuación (...) en primera o única instancia», tendrá dicha connotación aquella «actuación» que cumpla en el «proceso la función de impulsarlo», teniendo en cuenta la etapa en la que se encuentre y el acto que resulte necesario para proseguirlo".

(...)

"Si se trata de un coercitivo con «sentencia o auto que ordena seguir adelante la ejecución», la «actuación» que valdrá será entonces, la relacionada con las fases siguientes a dicha etapa, como las «liquidaciones de costas y de crédito», sus actualizaciones y aquellas encaminadas a satisfacer la obligación cobrada".

"Lo dicho, claro está, sin perjuicio de lo dispuesto por la Corte Constitucional (sentencia C-1194/2008), en cuanto a que el «desistimiento tácito» no se aplicará, cuando las partes «por razones de fuerza mayor, están imposibilitadas para cumplir sus deberes procesales con la debida diligencia (...) (Subrayas propias)

Aplicadas las nociones anteriores al caso que ocupa la atención de la Sala, es claro que no todo escrito interrumpe el término del desistimiento tácito, esto es, para los procesos ejecutivos en los que exista sentencia o auto de seguir adelante con la ejecución, como en este caso, la suspensión, según lo advirtió la Corte “...se logra únicamente con actuaciones tendientes a la obtención del pago de la obligación o actos encaminados a lograr la cautela de bienes o derechos embargables del deudor, a fin de rematarlos y satisfacer el crédito perseguido” (CSJ. STC4206-2021, reiterada en STC1216-2022).

Del examen de las actuaciones adelantadas en el presente trámite, de cara a las hipótesis en las cuales resulta procedente decretar la terminación del proceso por desistimiento tácito antes relacionadas, permiten concluir que en el caso de marras es posible la aplicación de dicha figura; en tanto que, para el momento en que se solicitó la terminación por desistimiento tácito, la solicitud que fue presentada el 31 de enero de 2020, no tenía la potencialidad de suspender el término, pues como se advirtió para este caso sólo, el pago o medidas cautelares para la solución efectiva de la obligación, eran las actuaciones que se podrían tener en cuenta para suspender el término de dos años de que habla la norma analizada.

De manera que, dentro del trámite procesal surtido en el proceso de marras se tiene que, no se dio una interrupción de los términos establecidos en la norma aplicable en este caso, en tanto que solo una actuación de fondo tiene la potencialidad de suspender el término.

Deviene de lo expuesto, en estricto cumplimiento de la orden emanada de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, actuando como Juez Constitucional, que en este caso el término establecido en la norma procesal no fue interrumpido, resaltando que como la norma lo

establece, no cualquier petición suspende el citado término; debiendo con ello REVOCAR el auto recurrido.

**DECISIÓN:**

En mérito de lo expuesto, **LA SALA UNITARIA DE DECISIÓN CIVIL, DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN,**

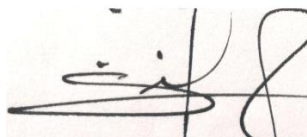
**RESUELVE:**

**PRIMERO. REVOCAR** el auto de fecha y procedencia indicado en la parte motiva de esta providencia. En consecuencia, se ORDENA la terminación del proceso por desistimiento tácito. Se ordena el levantamiento de las medidas cautelares decretadas en este asunto.

**SEGUNDO:** Sin condena en costas

**TERCERO:** Se ordena devolver el copiado al juzgado de origen, para que haga parte del expediente.

**NOTIFÍQUESE**



**JOSE GILDARDO RAMIREZ GIRALDO**

**Magistrado**